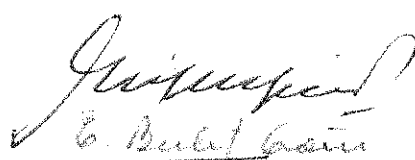
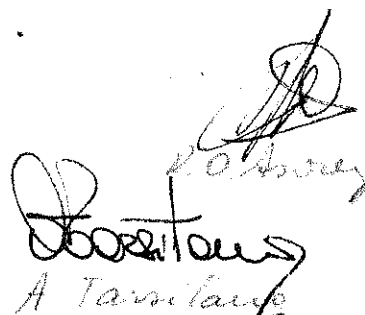


6. Desifuración de nuevos miembros adherentes:  
 se desifuran los siguientes miembros adherentes: Paradio, María de las Mercedes; Mosconier, Berla Nora; Costaino Pereyra, Patricia Alejandra; Kifueira, Liliaina Inés; Aeretto, Nora Lidia; y Loureiro, Santiago Gabriel.

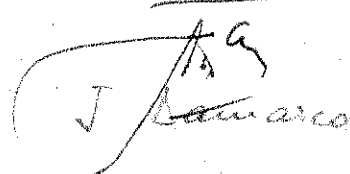
7. Renuncias: Se acepta la renuncia de los siguientes miembros adherentes: Castro, José A. y Roccatagliata de Demaria, Marta A. No existiendo más temas a tratar, se levanta la sesión, siendo las 15 hs.

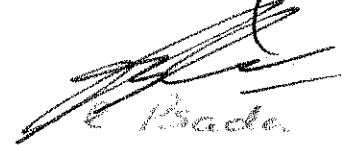
  
 R. Ruiral

  
 G. Bulit Goni

  
 A. Tarnitans

  
 E. Caldeiro

  
 J. Lamarc

  
 E. Prada

Acta 350 Seando las 13 hs. del día 12 de Febrero de 1988 se reúne el Consejo Directivo de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales con la presidencia del Dr. Rubén O. Arroy y la presencia de los siguientes consejeros: Jorge Jacoví, Rubén Ruiral, Enrique Bulit Goni, Carlos Prada y Alberto Carstans. En esta reunión se resolvió, por unanimidad, suscribir una nota dirigida al Sr. Secretario de Hacienda, Dr. Mario Brodersohn, y referida a las recientes modificaciones al sistema tributario como asimismo a los múltiples reflamentaciones que, para su implementación, han ultimamente emanado de la Secretaría de Hacienda y de la Dirección General de Impuestos.

Definidamente, se transcribe el texto de la nota:

"El Consejo Director de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales, tiene el honor de dirigirse al señor Secretario con la finalidad de llamar a una reflexión sobre los modificaciones que se introdujeron al régimen tributario a iniciativa de esa Secretaría de Hacienda, así como sobre las múltiples reclamaciones que para su implementación han emanado tanto de ella como de la Dirección General Impositiva.

Aun cuando tales normas hayan estado motivados en urgencias de la Nación, transgreden el orden jurídico, comprometen principios constitucionales, y terminarán por afectar la propia dinámica financiera en razón de la resistencia que fieren en los agentes económicos. Esta Asociación se hace cargo de la necesidad del dictado de normas que tengan por finalidad cubrir el déficit fiscal y combatir la inflación, pero con adecuación a principios insuperables del orden jurídico nifente tales como los de legalidad, equidad y razonabilidad.

Las recientes normas legales y reglamentarias no parecen efectivas en la lucha contra la erosión; solamente provocarán un aumento de la presión fiscal y de los costos administrativos de aquellos que ya contribuyen. Las debilidades de la administración tributaria argentina han sido sin lugar a duda la principal causa de que el sistema tributario cada día esté restringido a menores contribuyentes que pagan altos tasas, cada día mayores.

Es por ello que resulta imprescindible que se

una vez se comienza con el muchas veces anunciado proceso de fortalecimiento y reorganización de la Dirección General Impositiva. De lo contrario el proceso continuará con los mismos características fue hasta la fecha, es decir creación de nuevos impuestos, aumento de la tasa de los impuestos y crecimiento de los cuerpos públicos fue no implican recaudación efectiva sino disminución de la productividad. No debe descartarse en un proceso de restitución de la eficacia de la administración tributaria la colaboración voluntaria del sector privado. Esta intervención es plausible si se parte del hecho de que los contribuyentes cumplidores tienen interés en el cumplimiento de las leyes por todos, ya que ello puede redundar en una reducción de las tasas o por lo menos en la interrupción del proceso de su crecimiento.

Pero esa transferencia no puede exceder las posibilidades reales y concretas del medio, en el cual coexisten riesgos pasivos que tienen la capacidad organizativa necesaria y otros que distan mucho de poseerla. La insuficiencia de dicha transferencia compulsiva provoca justamente la reflexión que reclamamos, para evitar situaciones extremas que en definitiva terminen incrementando el mal que pretende solucionar y agregar a los eventuales aliados en la lucha contra la crisis.

No hay evidencia, además, de la utilización de la información disponible que

se traduzca en determinaciones concretas, fue serían el ejemplo fue la comunidad reunida para brindar su decidido apoyo.

Resulta imperativo reconsiderar el dictado de normas como la Resolución S.H. N° 10 del 29/1/88 por la que se establece un sistema asimétrico de actualizaciones e intereses normalmente más favorables para el contribuyente que para el fisco.

Otro ejemplo surge de la R.G. 2790 de la D.F. que limita la posibilidad de reducción de los anticipos a supuestos no verosímiles en una empresa en marcha tomando como condición para el caso del impuesto a los ganancias una disminución totalmente arbitraria y desproporcionada en los ingresos brutos, cuando lo fue el impuesto sobre la renta, contándose disposiciones legales recientes que lo admiten expresamente (último párrafo del Art. 34 de la ley 23549). Asimismo cabe cuestionar la multiplicidad de pagos a cuenta que se han establecido, algunos insusceptibles de reducirse aún cuando pueda acreditarse que excederán a la obligación del período, con el agravante de que su cómputo no reconoce actualización aún cuando el impuesto se determine - en ciertos sujetos - sobre una base actualizada.

No es nuestra intención abundar en las situaciones particulares que dan lugar a este llamado a la reflexión, pero baste decir que existen muchos otros ejemplos que

abonan nuestra infinidad (limitaciones al cómputo de quebrantos sin ninguna distinción por tipo de industria, escasas posibilidades de transferencias de saldos a favor del contribuyente, y en otro orden el remplazo de resoluciones generales interpretativas que son apelables, por circulares internas que no lo son, etc.).

El problema fiscal debe ser encarado con eficacia, persistencia y rigidez, lo que implica trabajar tanto en el corto como en el mediano plazo con sensatez, equilibrio y madurez.

La política tributaria de los últimos años no ha sido respetuosa de la necesaria fundamentación constitucional como premisa básica del Estado de Derecho. Se observa una mala ordenada protección del bien común en el juego de contraposición de intereses que afecta al fenómeno fiscal, con el agravante de que no se trata ya solo de la violación al derecho de propiedad sino de la imposición de cargas físicas, sin sustento en ley.

Los aspectos señalados precedentemente socavan el fortalecimiento de las instituciones democráticas, tan arduamente conquistadas por el pueblo de la Nación, al reflejar una falta de razonabilidad de los actos del Estado".

Buenos Aires, 18 de Febrero de 1988

No existiendo más temas fue tratado se levantó la sesión a las 14,30 hs.